



Embalse de La Pedrera en Alicante.
Obra fundamental en el trasvase Tajo-Segura.

Recursos hídricos "menguantes"

Invidados por tanta información, nos encontramos con problemas que nos abordan recurrentemente junto con discursos enconados sobre cuestiones aparentemente nuevas, pero que, en realidad, se repiten cada cierto tiempo. Temas que enfrentan a distintos territorios con discursos encendidos, promovidos, fundamentalmente, por políticos. Uno de ellos, el de los trasvases, hoy, de nuevo, asunto candente en la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía Oriental y Castilla la Mancha, sin olvidar el enfrentamiento de los primeros con Aragón y Cataluña por el parcialmente derogado Plan Hidrológico Nacional, que eliminó el trasvase desde el Ebro hacia el Sur, y la confrontación entre Comunidades Autónomas y Gobierno Central, todo ello unido a hostilidades entre ciudadanos en la calle.

¡Es necesario más rigor técnico y sentido de estado, y menos discursos políticos partidistas!

Recordemos a Manuel Lorenzo Pardo, director del Centro de Estudios Hidrográficos de España en la II República, quien, en el Salón Monumental de la Diputación de Alicante, -27 de febrero de 1933- en discurso leído por el Sr. ministro de Obras Públicas, Indalecio Prieto, dijo: "el agua, que en cualquier forma puede ser destinada a riego, perturba las facultades de la persona de mejor sentido; emborracha más que el vino; parece llevar más grados de fantasía que el vino de alcohol". Este discurso tiene vigencia hoy mismo.

En la provincia de Alicante tenemos un problema de agua de calidad a precio razonable, agravado con la aprobación de los nuevos planes hidrológicos de cuenca, al verse reducida la aportación del Tajo al Segura en unos 80 Hm³ al año, que debería sustituirse por agua desalada y por la reutilización de aguas depuradas. En Alicante tenemos la mayor planta desaladora de Europa, -Torrevieja-, además de la

de Agua Amarga en Alicante y la de Mutxamel, y nos distinguimos por la alta utilización agrícola de aguas depuradas con el 75% de estas para riego agrícola. La alternativa de pasar de agua trasvasada a desalada conlleva un aumento del coste de la electricidad, desde los 1,21 Kwh/m³ de media frente a los 4 Kwh/m³, a lo que debe añadirse el plus de energía necesaria para llevar el agua desde las desaladoras (a nivel del mar) hasta sus puntos de utilización en zonas de mayor cota. Este dato no avala la tesis ecologista, ni aporta la solución de encontrar agua a precio razonable para Alicante.

Con la modificación del Plan Hidrológico Nacional, -años 2004 y 2005-, se derogó el Trasvase del Ebro y se modificó la toma de Cortes de Pallás al azud de la Marquesa, que supuso que el agua del Trasvase Júcar-Vinalopó no sea apta para consumo urbano e industrial y con consecuencias para los usuarios no solo en su precio sino también en su calidad. Trasvase, por otra parte, previsto para 80 Hm³/año y que solo aportaría 38 hm³/año, creándose, en consecuencia, un déficit adicional en la provincia de Alicante lo que imposibilitaría que se cancelen las extracciones de los acuíferos sobreexplotados del Vinalopó.

No debemos perder de vista que en estos planteamientos se están olvidando a empresarios y, sobre todo, a agricultores, quienes han invertido esfuerzo y dinero en mejorar sus explotaciones ante unas expectativas de concesiones de agua de riego. Pero, ante tanta incertidumbre, tampoco tienen muy claro si continuar invirtiendo tiempo y dinero en modernizar sus explotaciones.

Urge, pues, un momento de sosiego y reflexión sobre la planificación hidrológica hecha y la que ha de hacerse, fundamentalmente en lo que se refiere al riego, cuyo valor en riqueza para este país, con puestos de trabajo, creación de ambientes sostenibles, sumideros de CO₂ y, lo más importante, proveedores de alimentos, es tan importante y difícilmente sustituible. ¡Qué lejos quedan los elogios a los agricultores en tiempos de la COVID-19, por haber garan-

Balsa de la Cuesta. Obra fundamental en el postravase Júcar-Vinalopó.





Desaladora de Torrevejea. La mayor de Europa.

tizado alimentos de calidad a la población! Alicante tiene unas condiciones climatológicas excepcionales para la producción de alimentos, pero esto requiere agua de calidad, a un precio razonable, lo que, hasta ahora se satisfacía con el agua de los trasvases y, por supuesto, de otros suministros, como la desalación y la reutilización, ampliamente utilizados en la provincia.

Otros, sin embargo, no ven, en su plena realidad, el problema del agua mientras la encuentren a todas horas abriendo simplemente el grifo, olvidando que ese simple

movimiento requiere de muchas personas e instituciones trabajando para que sea posible.

Lanzo, por último, estas preguntas: ¿Está la agricultura alicantina capacitada para pagar todas las tasas y costes derivados de esta política de cambios legislativos que conllevan una merma de los recursos de agua de calidad? ¿Es consciente la sociedad alicantina de la discriminación que sufre en política hídrica?

Pido, desde estas líneas, respeto para los agricultores y empresarios del Levante Español, que tanto han contribuido a la riqueza de este país, al Medio Ambiente y a garantizar el suministro de alimentos, también con la colaboración de técnicos, como los Ingenieros Agrónomos, en pro de la seguridad alimentaria. ¡Basta de ponérselo más difícil aún! ¡Basta con incrementar incertidumbres que llevan al ocaso y abandono de sus explotaciones!

Apostemos todos juntos por una justa reivindicación, aguas de calidad y a precio razonable, lo que redundará en la creación de riqueza y bienestar de todos. » ■

José M. Carrillo Cañizares

Delegado del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Alicante

(*) Vide Gil Olcina, Antonio y Rico Amorós, Antonio M., Políticas del Agua II. 978-84-612-5481-1 / Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia.

Alicante, la gran discriminada en las inversiones de 2023*

Una vez más la provincia de Alicante vuelve a ser la gran perdedora en la inversión territorializada para el ejercicio 2023, al destinarse menos cantidad para inversiones.

Así, los Presupuestos Generales del Estado 2023 asignan un total de 160,8 millones de euros en el capítulo de inversiones reales, de los 13.443,9 millones de euros de la inversión total regionalizable, lo que significa que solo recibe el 1,2% del total. Este porcentaje es sensiblemente inferior al que le correspondería atendiendo a su población, que, con un total de 1.904.362 habitantes, concentra el 4% de la población española. Quedamos relegados al puesto 31 del total nacional.

El conjunto de la Comunidad Valenciana, con un total de 1.269,5 millones recibe el 9,4% de la inversión total (un 5% más que en el año 2022), lo que le sitúa en cuarto lugar, por detrás de Andalucía, Cataluña y Madrid.

Llama la atención que, en términos absolutos, la provincia de Alicante, con mucha mayor población, reciba algo menos de financiación que la provincia de Castellón cuya

población es de 587.000 habitantes, a la que se le asignan 169,3 millones de euros. A la provincia de Valencia, con 939,3 millones de euros, le corresponde el 7% de la inversión territorializada nacional, porcentaje superior a su peso poblacional que del 5,5%, respectivamente.

En términos per cápita, la situación es más preocupante, puesto que la provincia se sitúa a la cola del ranking nacional, con una inversión de 84,5 euros por habitante, la más baja de todas las provincias de España. Este dato resulta más llamativo, si los comparamos con los 292,6 euros/hab. de Castellón y 362,8 euros/hab. de Valencia.

La provincia queda pues tocada y hundida en los presupuestos generales del estado 2023 hasta quedar en última posición de las inversiones territorializadas, aun siendo la quinta en población y aportación al PIB. Y el agravio todavía es mayor si se tiene en cuenta que el montante global de